

# Relaciones laborales en el Chile del estallido social del 18/O y el COVID-19

Jaime Ensignia<sup>1</sup>

## **Introducción: un marco digno de considerar**

Es de sentido común señalar que, desde principios de este año 2020, vivimos una época compleja, inédita, insospechada, y que deja a nuestras naciones y sociedades casi sin aliento, y sin la suficiente capacidad de responder adecuadamente a este inusitado virus que se instaló planetariamente, causante del COVID-19.

Lo que era normal, rutinario, doméstico, a partir de fines de enero del presente año dejó de serlo. Las alarmantes cifras de contagios, de fallecidos y de recuperados de esta pandemia cambian constantemente a nivel mundial y nacional. Se observan países que logran combatir el virus con éxito, otros con relativo acierto, mientras muchos, sobre todo en nuestro continente, sucumben debido a fallidas políticas públicas sanitarias.

Este es el escenario global, regional y nacional —a lo menos *a grosso modo*— de cualquier reflexión, análisis y debate que podamos iniciar en un tema como es el de las relaciones laborales en tiempos de estallido social y de los efectos de la pandemia del coronavirus en Chile.

---

<sup>1</sup> Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Fue director sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (1994–2014). Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21 (2014–). Colaborador del Barómetro de Política y Equidad. Miembro fundador de la Fundación Foro Permanente de Política Exterior de Chile.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su reciente quinto Informe Especial “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” (julio 15, 2020),<sup>2</sup> entrega un panorama desolador en relación con la caída del PIB nacional en Chile y respecto de las tasas de desocupación e índices de pobreza y de pobreza extrema en la región. Señala al respecto: “Sobre la base de estimaciones de los procesos en curso, la CEPAL proyecta, para el conjunto de la región, una caída promedio del PIB del 9,1% en 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe, sin incluir Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva el total subregional a una caída del 5,4%” (p. 9). Según ese mismo informe, Chile tendrá un crecimiento negativo de -7,9% para este año.

Según el mismo informe, el panorama es aún más crítico en cuanto a las proyecciones de la desocupación:

Dado que los indicadores de empleo en los primeros cuatro meses del año ya muestran un deterioro de las condiciones laborales y tomado en cuenta las nuevas proyecciones del PIB, se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor de 13,5% al cierre de 2020” y prosigue “Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a los 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados. (p. 10)

Mucho más desgarradora es la situación de la pobreza y pobreza extrema en la categoría cepaliana. Aquí el documento remite a la siguiente constatación:

La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. (p. 11)

Según la CEPAL, los pronósticos en lo referente a la pobreza extrema para el caso chileno serían de un 3,4% para este año (en 2019 era de un 1,4%), y de un 15,5% de pobreza para el 2020, habiendo tenido un 9,8% en 2019. En el caso nacional, todas estas cifras pueden variar sustantivamente de aquí a fin de año, y el país podría verse enfrentado a una situación más preocupante en cuanto a tales índices, sobre todo por las cifras exponenciales de aumento de la desocupación.

2 En [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf)

Se debe mencionar en esta introducción que, previo al desencadenamiento de la pandemia de COVID19, Chile, al igual que otros países de la región, estaba subsumido en un escenario de convulsiones y estallidos sociales. Estas reacciones de la sociedad civil en el caso chileno eran y siguen estando arraigadas en un fuerte cuestionamiento al modelo de desarrollo, a las desigualdades e inequidades sociales que se vienen arrastrando desde el retorno a la democracia. La consigna con la cual se tipificó este estallido social —“No son 30 pesos, son 30 años”— lo explicita todo. En el volumen 16 del *Barómetro de política y equidad* analizamos más exhaustivamente este estallido del 18-O.<sup>3</sup> Lo concreto, eso sí, es que todas las reivindicaciones sociales, políticas y laborales exigidas por la sociedad civil desde el mes de octubre pasado siguen siendo válidas y se han agravado en este período de pandemia y de pospandemia.

## 1 El pasado nos recuerda el presente y nos alerta hacia el futuro

En una esclarecedora lámina que frecuentemente edita la prestigiosa Fundación SOL recordando los 45 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, hace mención a los once pilares que sostienen el modelo neoliberal impuesto en dictadura y que se fortalecieron con los gobiernos democráticos elegidos desde 1989. Estos pilares son: 1) Plan Laboral (1979); 2) Sistema Tributario (1974–1984); 3) Sistema de Salud (1981); 4) Desnacionalización del cobre (1981); 5) Fomento forestal (1974); 6) Sistema de AFP (1981); 7) Privatización y abandono de la Educación Pública (1974); 8) Sistema bancario (1975–1986); 9) Subcontratación (1979); 10) Privatización del agua (1981); y 11) el pilar central: la Constitución Política (1980).<sup>4</sup>

No se analizará el conjunto de estos pilares, sino más bien aquellos que son atingentes a nuestro artículo, sea de manera directa o bien indirecta. El pilar del Código Laboral de José Piñera del año 1979 transformó radicalmente las relaciones laborales en favor de los sectores empresariales, fortaleciéndolos y debilitando de manera alevosa el poder de negociación del sindicalismo nacional, atomizando sus estructuras y vaciándolo de contenido político. La abogada laboralista María Ester Feres, analizando el último proyecto de Modernización de las Relaciones Laborales del gobierno de M. Bachelet II (2014–2018), constata: “El Plan Laboral forma parte de los ejes estratégicos del mo-

3 Jaime Ensignia, “Relaciones laborales en tiempos de crisis: la jornada laboral de las 40 horas”, en *Barómetro de política y equidad*, vol.16: La demanda ciudadana por una nueva democracia Chile y el 18/O (Santiago: Fundación Equitas / Ediciones SUR, 2019, pp. 117-118), <http://barometro.sitiosur.cl/barometros/la-demanda-ciudadana-por-una-nueva-democracia-chile-y-el-18-o>

4 Fundación Sol, “La violencia estructural y cotidiana a 42 años del golpe: Los 11 pilares dictatoriales que sostienen el modelo económico-social. Los 11 pilares dictatoriales aún vigentes, que sostienen el modelo chileno” (11 de septiembre, 2015). <https://bit.ly/2XQbWJA>,

delo neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar. El gran empresariado, consciente de su importancia en el modelo de acumulación vigente, ha concentrado su poder de presión, bloqueando su cambio desde los años 90 a la fecha”.<sup>5</sup> En el mismo artículo, Feres Nazarala critica a la clase política y económica de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría: “En lo político, con la cooptación ideológica del neoliberalismo, especialmente de sectores tecnocráticos de la propias coalición gobernante [se refiere al gobierno de Bachelet II], se desarticuló —durante años y con éxito— la constitución de actores sociales populares, y con su apoyo decidido se consolidó al gran empresariado como único actor socio-político a nivel nacional” (p. 9).

Hubo transformaciones de las relaciones laborales en estos más de treinta años, eso nadie puede dudarlo. Sin embargo, en opinión mayoritaria de especialistas, de abogados, de sociólogos, cientistas políticos laborales y de dirigentes sindicales, estas transformaciones han sido de baja intensidad y, en algunos casos, cosméticas. No hubo ningún proyecto de reforma laboral que tuviese como objetivo central derogar el Código Laboral de la dictadura. En este escenario

Chile exhibe (...) un paisaje anclado en el pasado, agobiado por sujeciones institucionales que impiden, en buena parte, asumir el debate actual del futuro del sindicato y del propio trabajo, generando una brecha entre la realidad sofocada por una organización político-jurídica que la retiene bajo las formas más arcaicas y un presente desafiante de evolución vertiginosa (globalización, digitalización, transformación de formas de trabajo, adecuación y caducidad de instituciones, descrédito de la democracia, entre otras) que plantea interrogantes urgentes respecto de la organización de los trabajadores, el propio trabajo y su futuro.<sup>6</sup>

La deuda de la democracia y de los actores gubernamentales, de parlamentarios, partidos políticos y gremios empresariales con el mundo del trabajo, es inmensa. Como sociedad se está al debe en lo que concierne a la vida de trabajadores y trabajadoras y de sus familias, puesto que:

- no se desmontó el Código Laboral dictatorial;
- no se desmontó la Ley N° 3500 que privatizó la seguridad social y el sistema de reparto existente hasta 1981. Las Administradores de Fondo de Pensiones (AFP) pasaron a ser el corazón de una supuesta seguridad social;

5 María Ester Feres Nazarala, “Reforma laboral: Un proyecto inocuo”, en *Le Monde diplomatique* (2015, mayo), p. 9. Edición impresa.

6 Álvaro Flores M., “Relaciones laborales, cuatro décadas bajo la ortodoxia neoliberal II”, [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl), 5 de septiembre, 2019. <https://bit.ly/3fL6nCf>

- no se ha logrado fortalecer el sistema público de salud, donde las instituciones de salud previsional (isapres) digitan los destinos de la salud de la población;
- persiste la deuda con la Educación Pública y de Calidad, más allá de avances en esta materia.

## 2 La política laboral del gobierno de Piñera II: entre el estallido social y la pandemia

En números anteriores del *Barómetro de política y equidad* hemos analizado los dos primeros años de la política laboral del actual gobierno. Señalamos que hubo una agenda laboral por parte del Ejecutivo que, en términos generales, era una propuesta fracasada, sobre todo en la implementación del proyecto de ley denominado Modernización Laboral para la Conciliación, Familia e Inclusión. Más evidente fue la derrota política y social del gobierno en lo referente al proyecto de ley sobre la jornada de las 40 horas.<sup>7</sup> La administración del gobierno de Piñera y las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social no tuvieron la fuerza política y social suficiente, como tampoco la fuerza de las ideas, para hegemonizar el debate a su favor. Menos aún lograron revertir esta situación en el escenario que se abrió con el estallido social a partir del 18 de octubre 2020.

Por otro lado, la sociedad civil y las organizaciones gremiales (la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF), sindicatos nacionales como la Federación de Sindicatos del Cobre (FTC), el Colegio de Profesores, la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y afines de Chile (FENATRAPECH), el Movimiento No+AFP y la Central Unitaria de trabajadores (CUT) han logrado conjugar intereses y actúan unidos para levantar sus peticiones frente a un gobierno que no responde a sus demandas ni los convoca, que más bien los excluye del debate político laboral. Esta situación se ha hecho más aguda a partir de la pandemia de enfermedad por el coronavirus: el actor social y sindical ha quedado totalmente al margen de las políticas económico-sociales y sanitarias que el gobierno de Piñera lleva a cabo desde marzo al presente.

### 2.1 Ley N° 21.220: Trabajo a Distancia y su implementación

Esta ley fue promulgada el 24 de marzo pasado por el presidente de la República luego de pasar el tercer trámite legislativo. Conocida también como Ley del Teletrabajo, ingresó al debate parlamentario en agosto de 2018. En opinión de la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, esta normativa vino a satisfacer una necesidad de las nuevas formas del trabajo y a dar una

7 Ensignia, "Relaciones laborales en tiempos de crisis", pp. 119–120.

respuesta a la crisis sanitaria que se iniciaba en el país. Agradeciendo la labor parlamentaria, constataba: “Mientras más trabajadores puedan servir cumpliendo con sus labores desde sus domicilios, menos expuestos estaremos los chilenos al Coronavirus; entonces no solo apoyaron una ley que permitirá generar más empleo, sino también una norma que permitirá al país superar de manera más eficiente y rápida la crisis sanitaria que vivimos”<sup>8</sup>.

La ley fue aprobada y puesta en marcha en pleno período de la pandemia. No ha habido un debate más riguroso que el desplegado en torno a ella, ni un tema más estudiado en las organizaciones y gremios sindicales que las implicancias de una normativa que traslada el trabajo que originalmente se hacía en oficinas o en las empresas, a los domicilios particulares de los trabajadores y trabajadoras. Se estima que cerca de un 25% de la fuerza laboral estaría en la actualidad en esta modalidad de trabajo a distancia. Se han levantado voces y opiniones críticas de abogados laboristas y representantes sindicales y gremiales en torno a la gestación de esta ley, considerando que su implementación habría estado un tanto forzada por las circunstancias del momento que vive el país. Señalan que no hay una efectiva fiscalización de lo que está significando el trabajo en casa, incluidos aspectos como horarios de trabajo, el derecho a desconexión, implementos que debe proporcionar el empleador, condiciones de trabajo seguras en el hogar y logística apropiada. Incluso se señala que, pese a lo explicitado por la misma ley en cuanto a resguardos mínimos laborales, tales normativas no se están cumpliendo y muchos empleadores estarían imponiendo exigencias laborales adicionales a sus empleados y empleadas, más allá de lo convenido y pactado. Para el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Cono Sur, Fabio Bertranou, el potencial de la modalidad remota es limitado, puesto que no todas las actividades, servicios y tareas pueden aplicarla. Constata al respecto que “para que el teletrabajo sea productivo y beneficioso para los trabajadores no solo requiere ser regulado, sino que también necesita cambios en el comportamiento y las prácticas de las empresas y los trabajadores”<sup>9</sup>. Esta ley, en estricto rigor, deberá ser analizada y estudiada una vez que cierta “normalidad” sanitaria y laboral se haga realidad.

## 2.2 Ley N° 21.227: *Protección al Empleo*

Promulgada el 31 de marzo 2020, esta ley faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

8 Gob.cl, “Congreso despacha nueva ley que regula el Trabajo a Distancia”, 23 de marzo, 2020. <https://www.gob.cl/noticias/congreso-despacha-nueva-ley-que-regula-el-trabajo-distancia/>

9 “Seis claves de cómo será el trabajo poscuarentena”, *El Mercurio 120 años*, domingo 31 de mayo, 2020, p. 16. <https://bit.ly/2PFXkYH>



Sus objetivos, según las autoridades de gobierno, es proteger los ingresos y fuentes de empleos de más de 4,7 millones de trabajadoras y trabajadores afectados por la emergencia de la pandemia del coronavirus. Con tal objetivo, contempla la suspensión de la relación laboral cuando exista una declaración de la autoridad que implique la paralización de actividades, o cuando el empleador y trabajador lo acuerden, posibilitando también pactar una reducción de jornada laboral. En caso de suspensión de la relación laboral, trabajadores y trabajadoras podrán acceder al seguro de cesantía, que cubre el primer mes un 70% del salario; el segundo mes, el 55% y el tercer mes, el 45%.<sup>10</sup>

La oposición política al gobierno, partidos políticos como el Socialista, Comunista, Democracia Cristiana y Partido por la Democracia, más sectores del Frente Amplio y el movimiento sindical, criticaron desde su inicio la puesta en marcha de esta ley. El argumento central es que hacía recaer los costos laborales de la pandemia en los ahorros previsionales de los trabajadores. Nuevamente quien pagaba los costos era el mundo del trabajo, mientras el sector empresarial asumiría tan solo los pagos previsionales de sus empleados. La ley les permite a trabajadores de la pequeña y mediana empresa acogerse a los “beneficios” de esta iniciativa legal, con el fin de preservar sus empleos. Sin embargo, empresas grandes y poderosas han hecho mal uso de esta ley, enviando a sus trabajadores a acogerse a ella. En definitiva, esta normativa, denominada “protección al empleo”, poco y nada hace para protegerlo y mantenerlo.<sup>11</sup> Al respecto, según una encuesta del Banco Central, cerca de la mitad de empresas acogidas a esta ley —que a fines de mayo, principios de junio, eran más de 100.000, cifra que de seguro seguirá subiendo— no podrá reintegrarlos.<sup>12</sup>

### 2.3 La “exitosa” red de protección social del gobierno

El principal asesor del presidente Piñera, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, el economista y militante histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Cristián Larroulet, a través de su cuenta de Tweet, el 5 de julio de 2020 enviaba el siguiente comunicado: “Red de Protección Social de Chile la más protectora de América Latina”, a lo que añadía una “Tabla de Beneficios y estimaciones de hogar y personas beneficiarias”.

¿Qué nos muestra esta tabla de beneficios?:

10 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “Congreso aprueba proyecto de Protección al Empleo que beneficiará a más de 4,7 millones de trabajadores”, 31 de marzo, 2020. <https://bit.ly/31H2F7t>

11 Gonzalo Martner, “Una ley insuficiente frente a un horizonte oscuro”, [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl), 6 de abril de 2020.

12 Carlos Alonso, “Mercado laboral en crisis: empleo cae 20% y personas sin trabajo superan los 3 millones”, [www.pulso.cl](http://www.pulso.cl), 1 de agosto, 2020, p. 4.

- 1) Ley de Protección al Empleo: 4,7 millones de beneficiados a un costo de USD 2000 millones, inyectados al Fondo Solidario.
- 2) Bono CODIV-19: \$50.000 para 1,5 millones de familias, a un costo de USD 167 millones.
- 3) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE-I): para una familia de cuatro personas, un ingreso de entre \$130 mil y \$260 mil; beneficia a 2 millones de hogares, con un costo de USD 830 millones.
- 4) Distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos: beneficia a 2,5 millones de hogares, con un costo de USD 100 millones.
- 5) Inyección Fondo de Municipalidades: beneficia a todas las comunas del país, con un costo de USD 100 millones.
- 6) Ingreso mínimo garantizado: con un monto de \$59.200, beneficia a unos 670 mil trabajadores, con un costo de USD 223 millones.
- 7) Beneficio trabajadores independientes: alcanza a 1,2 millones de trabajadores, con un costo de USD 300 millones.<sup>13</sup>

En esta tabla no está contemplado el IFE-II, que es parte importante del llamado “Marco de Entendimiento” entre el gobierno y parte de la oposición, según el cual el Ministerio de Hacienda aprueba un monto de USD 12.000 millones con el objetivo de enfrentar la crisis actual y sostener la futura reactivación económica en un período de 24 meses. El IFE-II aumenta el apoyo a un monto de \$100.000 por persona. Pero este aumento, que es valorado por la oposición, aún está por debajo de la línea de la pobreza, cuyo valor actual es de \$170.688. Según la Fundación SOL, el IFE-II tendrá una cobertura equivalente a solo el 34% de los hogares chilenos.

Ahora bien, más allá de lo real de las medidas asumidas por el gobierno — que, entre otros aspectos, fueron desplegadas gota a gota e insuficientemente, y siempre con la advertencia del ministro de Hacienda en relación a que no era posible gastar más—, lo que el tweet de Larroulet devela es cómo las autoridades de gobierno han creído, creen y seguirán creyendo que, en materia de políticas sociales, lo están haciendo extraordinariamente bien.

Si hubiese que hacer una síntesis de esta sección del artículo, se podría afirmar lo siguiente: en la relación del gobierno con el mundo del trabajo, tanto en el período del estallido social como en el de la pandemia del COVID-19, se observa un comportamiento gubernamental con fuerte sesgo antiderechos laborales. Esto ha quedado de manifiesto en numerosos decretos emanados de la Dirección del Trabajo (DT), cuyo objetivo último, al igual que en las dos leyes revisadas —sobre trabajo a distancia y protección del empleo—, es flexibilizar al máximo el contrato laboral. Y esto con las consecuencias consabidas:

13 Cristián Larroulet, [twitter.com/clarroulet?lang=es](https://twitter.com/clarroulet?lang=es) 5 de julio 2020. Reproducido en <https://twitter.com/iansalgadov/status/1279965234309083136>



situar al trabajador en una posición de desventaja ante el empleador, aislarlo de sus organizaciones sindicales y gremiales, precarizar sustantivamente las condiciones de trabajo y minimizar los pisos laborales alcanzados en las negociaciones colectivas. Paralelamente, el proyecto del Ejecutivo ha sido fortalecer aún más el poder empresarial. El desnivel entre empresariado y sindicatos se ha ampliado exponencialmente en favor del primero.

Los sindicatos y las organizaciones gremiales han visto limitado su rol en la defensa y representación de los intereses de la fuerza laboral. Un caso ejemplificador al respecto es la reciente medida del gobierno materializada en el plan “Paso a Paso Laboral”, dado a conocer el 3 de agosto por los ministerios de Trabajo y Previsión Social y el de Salud, seguida por la instalación de una mesa de trabajo en que participaban únicamente el ministro de Economía y los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los sindicatos nacionales y la CUT quedaban lisa y llanamente excluidos. Este plan ha sido severamente criticado por las organizaciones sindicales, puesto que nuevamente no se está privilegiando la salud de los trabajadores y trabajadoras, y atendiendo más bien los intereses de la economía. Por primera vez en todo este tiempo —el viernes 7 de agosto—, la dirigencia máxima de la CUT encabezada por su presidenta, Bárbara Figueroa, logró reunirse con el entonces titular de Hacienda, Ignacio Briones, para dialogar sobre la negociación del salario mínimo (el monto actual es \$320.000) entre el gobierno y la central sindical. Los dirigentes sindicales aprovecharon la ocasión para exponerle al ministro lo grave del desempleo en el país y sus repercusiones para los trabajadores y sus familias, y el malestar social que se estaba engendrando en la ciudadanía.

### **3 Movimiento social y sindical: consecuencias político-sociales para el período actual y pospandemia**

Resulta paradójico que, en este escenario de pandemia, el trabajo, los denostados trabajo y trabajador, vuelven a ser valorados: levanten la cuarentena para que “vuelvan a trabajar”, se convierte en el anhelo empresarial. Debemos cuidar la salud laboral, los puestos de trabajo y la productividad, señalan los diferentes gobiernos, incluso el gobierno de Chile, pese a que, en el caso nacional, las autoridades gubernamentales no son capaces de abrirse a lo que internacionalmente se ha denominado el Ingreso Básico Universal (IBU) como una medida protectora de la fuerza laboral. Tanto la ONU y la CEPAL como la OIT y otras organizaciones internacionales, recomiendan a los gobiernos atenuar los efectos económicos de la pandemia fijando un IBU que cubra las necesidades vitales de las personas asalariadas y sus familias.

### 3.1 *Rearticulación del movimiento social y sindical*

Las grandes manifestaciones sociales y estudiantiles que en la segunda década de este siglo <sup>xxi</sup> han convocado en Chile al conjunto de la ciudadanía, han sido:

- En 2011, las de universitarios y secundarios que pusieron en jaque las políticas educacionales mercantilizadas de los gobiernos de la Concertación y el primer gobierno de Piñera. Ese mismo año se realizaron masivas manifestaciones convocadas por organizaciones ambientalistas en contra del proyecto hidroeléctrico en Aysén.
- Bajo el gobierno de Bachelet II, se manifestaron miles de personas en contra de las AFP. Liderado por el dirigente sindical de los bancarios, Luis Mesina, se originó el exitoso movimiento No + AFP.
- En 2016, el inicio de las masivas manifestaciones convocadas por las organizaciones feministas y de mujeres bajo el lema “Ni una menos”.

El broche de oro de estas secuelas de manifestaciones de la sociedad civil en la segunda década del siglo son las que se iniciaron el 18-O pasado por el alza de las tarifas del sistema de transporte público en 30 pesos en la ciudad de Santiago. Esa medida originó un descontento generalizado en la población de la capital y se extendió a todas las regiones del país. Ya no fue el rechazo al alza de los 30 pesos, sino que se inició una oposición social y política masiva al modelo socioeconómico neoliberal, a la desigualdad, a los bajos salarios, a las pensiones indignas, a las deudas de los estudiantes universitarios, a la corrupción económica y política, entre otras reivindicaciones imperantes en el Chile de estas últimas cuatro décadas. Un momento cúlmine de este estallido social fue la marcha convocada el viernes 25 de octubre en Santiago y otras ciudades del país, que en la capital reunió a más un millón y medio de manifestantes, y a nivel nacional alcanzó cerca de los dos millones de personas en las calles.

El sujeto sindical y social, desde el punto de vista de su organicidad e incidencia en el debate político social, ha estado muy debilitado en estas tres últimas décadas. Ha debido actuar y moverse en un terreno político hostil en cuanto a sus luchas sociales y reivindicativas. Pero, desde el 18-O, algo ha comenzado a cambiar en cuanto a la incidencia de los movimientos sociales, sindicales y gremiales en la política nacional. En este escenario de efervescencia social se crearon la Mesa Social y el Bloque Sindical, donde sindicatos nacionales, la ANEF, el Colegio de Profesores, la Federación de Trabajadores del Cobre y la CUT, y muchos otros, participan desde sus inicios, convocando además a las movilizaciones masivas que tan solo se han interrumpido con la pandemia sanitaria del COVID-19.

El sindicalismo nacional, expresado en sus cuatro centrales sindicales —la Central Unitaria de Trabajadores; la Unión Nacional de Trabajadores; la Central Autónoma de Trabajadores; la Central de Trabajadores de Chile, dirigida por el controvertido mítico dirigente sindical, el expresidente de la CUT, Arturo Martínez—, arrastra severas debilidades organizacionales. En un reciente estudio de la Fundación SOL se analiza esta debilidad: "...tenemos que en Chile hay un total de 11.099 organizaciones sindicales, de las cuales el 56,1% corresponde a Sindicatos de tipo empresa. Esta categoría agrupa en total 6.226 organizaciones sindicales".<sup>14</sup> En un desglose de esta cifra, se señala que un 22,2% agrupa a 2.459 sindicatos independientes; un 11,7%, a 1.298 sindicatos interempresa; un 7,8% a 870 sindicatos de establecimiento; y un 2,2%, a 246 sindicatos transitorios. El mismo estudio indica que 1.144.553 trabajadores y trabajadoras forman parte de un sindicato activo (p. 24).

La dispersión, la atomización de las organizaciones del mundo laboral, da cuenta de una cierta "pulverización sindical". Sin embargo, pese a sus dificultades estructurales, el sindicalismo nacional ha logrado convertirse en un actor sociopolítico relativamente "relevante" desde el estallido social hasta el presente, sobre todo por la presencia y acción de la CUT, y especialmente por su presidenta y su secretario general. Es innecesario reseñar en profundidad todas las iniciativas en que la CUT ha estado involucrada para dialogar con el gobierno y manifestar sus peticiones y puntos de vista sobre la realidad política y social del país. Ya el 25 de octubre de 2019, la central sindical elevaba un petitorio llamado Pliego Laboral; en noviembre de ese mismo año, junto a la Mesa Social, destacaba sus apreciaciones sobre el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución al que había llegado parte de la oposición con el gobierno. La Declaración de Unidad Social de Rechazo al Acuerdo de Paz y Nueva Constitución expresaba, entre otras cosas, el malestar de la CUT por no haber sido consultada por los partidos políticos que firmaban ese acuerdo. Tal como lo reseña un especialista en temas laborales, "sindicatos en tiempos de crisis: reviven pero son ignorados por la autoridad", y habría que decir que también lo son por parte de la oposición al gobierno.<sup>15</sup> El 28 de noviembre, el que en ese momento era ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recibía a la Mesa Social, pero posteriormente no hubo por parte del Ejecutivo respuestas a los planteos de esa instancia. Una de las últimas iniciativas por parte de la CUT fue la "Propuesta de los y las trabajadoras frente a la crisis COVID-19", presentada el lunes

14 Valentina Doniez Sciolla y Recaredo Gálvez Carrasco, "Reformas en tiempos de crisis. Análisis crítico de la agenda laboral del gobierno", Documento de trabajo 2020 (Santiago: Fundación SOL, junio 2020), p. 24. <http://www.fundacionsol.cl/estudios/reformas-en-tiempos-de-crisis-2020/>

15 Pablo Pérez Ahumada, "Sindicatos en tiempos de crisis: reviven pero son ignorados por la autoridad", *CIPER*, 01 de mayo, 2020. <https://ciperchile.cl/2020/05/01/sindicatos-en-tiempos-de-crisis-reviven-pero-son-ignorados-por-la-autoridad/>

1 de junio de 2020 en la sesión del Consejo Superior Laboral, consejo tripartito, en reunión exigida por la central sindical.

En todo este tiempo, la CUT ha desempeñado un rol proactivo frente a la dramática situación en que se encuentran el país y la fuerza laboral. Una reciente encuesta del Barómetro del Trabajo de junio de este año, entrega informaciones relevantes para comprender el estado actual en que se desenvuelve el sindicalismo. A la pregunta acerca de la confianza que se tiene en las instituciones y elites, un 40% destaca a los sindicatos... aunque es cierto que la CUT tiene un 20%, al igual que la SOFOFA. A la pregunta respecto de si los sindicatos hoy, en tiempos de pandemia, son más, menos o igual de indispensables para defender los derechos de los trabajadores que antes de la pandemia, un 29% los señala como más indispensables y un 38% igual de indispensables.<sup>16</sup> En síntesis, ha habido por parte de la sociedad civil un significativo reconocimiento a la acción del movimiento sindical y sus organizaciones.

### 3.2 *Mujer y trabajo bajo la pandemia*

Si hay un sector en el mercado laboral a nivel nacional que padece críticamente las consecuencias de la pandemia, es el estamento laboral femenino:

Las mujeres están sintiendo con particular fuerza el impacto de la pandemia. Se están perdiendo más empleos, pero al mismo tiempo están asumiendo más tareas no remuneradas en el hogar ante la inexistencia de la habitual red de apoyo para el cuidado de los hijos: abuelos, salas cunas o colegios. Este deterioro de la calidad de vida de las mujeres ya es una realidad, y el temor es que este escenario se profundice.<sup>17</sup>

Será evidente que, al término de esta pandemia, se elevarán exponencialmente los índices de cesantía femenina y declinará de manera importante la inserción femenina en la fuerza de trabajo. En América Latina, según diversos estudios, la inserción laboral de la mujer está entre 60% y 65%. En Chile la cifra se sitúa en un 42,6%, con una tasa de desocupación para el presente trimestre (mayo, abril, junio 2020) de un 11,7%. Un factor importante de destacar es el relacionado con los sectores de la economía en que se encuentra preferentemente el trabajo femenino, y sus condiciones laborales y salariales; al respecto, un aspecto relevante es la brecha de sueldos entre hombres y mujeres, que es en promedio un -27% para el trabajo femenino: "La mayoría de las mujeres trabajan en el sector terciario de la economía, vastamente precarizado y compuesto principalmente por comercio y servi-

16 Estudio "La Pandemia en el gran Santiago en cuarentena", Barómetro del Trabajo (Santiago: Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL)-CUT / MORI Chile, junio 2020). <https://bit.ly/2XQQnsf>

17 Patricio Poblete y Dayana Sánchez, "Covid borra 10 años de avance de inserción laboral femenina y amenaza con ir por más", *La Tercera* | Pulso, 5 de junio, 2020. <https://t.co/Gb5uqAhE1L?amp=1>

cios. Este es el sector que más se ha visto afectado por la crisis y en donde se espera una lentísima recuperación”.<sup>18</sup>

### 3.3 Índices exponenciales del desempleo

Estamos frente a una bomba de tiempo en lo que significan las cifras actuales de desempleo, señalan algunos expertos en materia laboral: “Esta es la mayor crisis laboral en décadas, superando incluso a la de 1982–1983, donde hubo disminuciones de 10% anual del empleo”.<sup>19</sup> La situación del desempleo es crítica para el gobierno y la sociedad chilena. Las personas que carecen de trabajo oscilan en los 3 millones, con tendencia a subir en los próximos meses, sobre todo cuando se esté en condiciones de alzar la cuarentena en las ciudades más importantes del país.

La Encuesta Nacional del Empleo dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el trimestre abril, mayo y junio de este año nos entrega preocupantes cifras: una tasa de desocupación oficial del orden de un 12,2%. Es la cifra más alta desde que hay registros comparables: el desempleo según sexo, para los hombres es de un 12,6% y para las mujeres, de un 11,7%. La estimación del total de ocupados descendió en un 20%; los “ocupados ausentes” representan el 18,1%, cifra que se traduce en 801.800 personas, las acogidas a la ley de Protección del Empleo. La población fuera de la fuerza de trabajo se expandió en un 31,6%. La contracción de los ocupados fue influida por el comercio (-24,0%), la construcción (-30,6%), y alojamiento y servicio de comidas (-48,5%). En tanto que, por categoría ocupacional, los principales retrocesos se observaron en los trabajadores por cuenta propia (-34,7%) y los asalariados formales (-10,0%).<sup>20</sup> El economista Gonzalo Martner realiza un interesante análisis de este Boletín del INE sobre el empleo trimestral, donde constata que “se han perdido 1,8 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo efectiva alcanzó a un 30%; la caída porcentual del empleo fue mayor en las mujeres (-23,5%) que de los hombres (-17,3%); los desocupados que buscan trabajo sumaron 996,91 mil personas; la suma de los denominados ‘desempleados efectivos’ alcanza la cifra de 3,02 millones en este segundo trimestre del año”. Finalmente señala: “si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año reciente (2017), se necesitaría 9 años para recuperar los puestos de trabajo perdidos”.<sup>21</sup>

18 Mabel Araya, “Crisis del trabajo: pandemia y participación laboral femenina”, *www.elmostrador.cl*, 11 de junio, 2020. <https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/11/crisis-del-trabajo-pandemia-y-participacion-laboral-femenina/>

19 Carlos Alonso, “Mercado laboral en crisis: empleo cae 20% y personas sin trabajo superan los 3 millones”, *La Tercera* | Pulso, 31 de julio, 2020. <https://bit.ly/3fOThnm>

20 INE “Boletín Estadístico: Empleo Trimestral”, *www.ine.cl*, Edición Nro. 261/31 de julio de 2020,

21 Gonzalo Martner, “Se han perdido 1,8 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo efectiva



En la cuenta pública del presidente Piñera (31 de agosto) frente al Congreso se anuncia un plan de reactivación económica con énfasis en la inversión y la creación de 1,4 millones de empleos, comprometiéndose un monto adicional de USD 4500 millones para la inversión pública y USD 2000 millones para iniciativas privadas y subsidios de empleos.<sup>22</sup>

Una apretada síntesis de estas alarmantes cifras del desempleo laboral lleva a predecir que se está frente a una situación de extrema incertidumbre social, que afecta a miles de familias chilenas en relación a la exclusión del mercado de trabajo. Esto puede convertirse en un peligroso polvorín social en el Chile pos 18-O y pospandemia. Tal como lo constata una destacada periodista de la plaza, “Chile es una pradera de pasto seco. 3 millones de personas están sin trabajo. Para hacerle frente, el Pdte anunció un plan económico que para el líder de los empresarios sólo se logrará con paz social. Pero la paz social no se escribe en piedra, se construye con gestos concretos”.<sup>23</sup>

### 3.4 Relaciones laborales en la nueva Constitución: una breve reseña

En la actual Constitución, los temas laborales y de negociación colectiva se abordan en los números 16° y 19° del artículo 19, que declaran la libertad de trabajo, establecen la voluntariedad de la sindicalización, plantean que el derecho a la negociación colectiva es del trabajador con la empresa, y prohíbe las huelgas de empleados estatales y municipales, así como para el caso de empresas que atienden servicios de utilidad pública.<sup>24</sup>

En ese párrafo está consagrado lo más esencial del tema del trabajo de la Constitución de 1980. El 26 de abril de 2020 estaban convocadas las elecciones para un plebiscito donde se dirimiría si la ciudadanía deseaba una Nueva Constitución o estaba satisfecha con la actual. Por razones sanitarias que se desprendían de la aguda crisis del COVID-19, esa fecha fue postergada para el 25 de octubre próximo.

De triunfar la alternativa que aprueba la redacción de una Nueva Constitución, la próxima etapa es la elección de los constituyentes, hombres y mujeres,

---

alcanzó un 30%”, *www.cronicadigital.cl*, 31 de julio, 2020 [<https://bit.ly/3kGYiIV>]. Datos más actualizados en: Gonzalo Martner, “La grave crisis del empleo y sus salidas”, *La Tercera* | Opinión-Voces, 7 de agosto, 2020 [<https://bit.ly/3fU9Uyk>].

22 Carlos Alonso, “Plan de reactivación pone foco en inversión y busca impulsar 1,4 millones de empleos”, *La Tercera*, 1 de agosto, 2020, pp. 4-5. <https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20200801/281612422737288>

23 Mirna Schindler (1 de agosto, 2020), <https://twitter.com/mirnaschindler/status/1289716428904505344>. El plan al que hace mención Schindler fue señalado por el Presidente en su cuenta pública del 31 de julio 2020, y por el líder de los empresarios Juan Sutil, el nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Producción y el Comercio (CPC).

24 Ramón Rivera, “Debate Constitucional en la economía. Trabajo, negociación colectiva, huelga, sindicatos”, *El Mercurio*, domingo 12 de abril, 2020, p. B9. <https://bit.ly/3gOSMez>



que se realizará el 11 de abril de 2021 en conjunto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores. A partir de la elección de los constituyentes, se inicia el debate sobre los ejes centrales de esta Nueva Constitución que, por primera vez en la historia republicana de Chile, será elaborada democráticamente. En los contenidos de esta nueva Carta Magna, el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales y gremiales, las organizaciones empresariales, los centros de pensamiento, fundaciones políticas, partidos políticos, parlamentarios y parlamentarias, abogados laboristas, entre otros muchos, tendrán mucho que aportar para relevar el tema del trabajo como un derecho constitucional que debe ser respetado y defendido.

El Foro Laborista por una Nueva Constitución, agrupación de abogados laboristas, de sociólogos y académicos expertos en temas laborales, expresa en una declaración interna que, entre otros tópicos necesarios de debatir en materia de una Nueva Constitución, están el asegurar un verdadero diálogo social entre las partes, sindicatos y gremios de la administración pública con organizaciones empresariales y el Estado; el reconocimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, públicas y privadas, legitimadas para negociar colectivamente; la consagración de la negociación colectiva por rama o actividad; el garantizar el derecho fundamental a la huelga y respetar los convenios fundamentales de la OIT; garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en su propia empresa; reconocer el derecho a una vejez digna, garantizando un régimen previsional basado en la solidaridad y la equidad intergeneracional como principios rectores de la Seguridad Social; y, finalmente, el reconocimiento de la dignidad y el valor del trabajo.<sup>25</sup>

#### 4 Síntesis y perspectivas

Estamos frente a una de las peores crisis de la humanidad, a una crisis sistémica y con la peor contracción económica de los últimos cien años.<sup>26</sup> En el caso nacional, desde marzo a la fecha el COVID19 ha golpeado fuertemente en la economía real (empresas, industrias, sector forestal, exportador agrario, servicios, *retail*, etcétera), lo cual afecta directa y duramente al mercado laboral, al mercado informal, a las familias de los asalariados y al conjunto de la sociedad chilena. Esta situación es muy diferente de lo que se experimentó bajo la crisis *subprime*, que fue más bien una crisis financiera originada en los Estados Unidos en 2007, con sus consabidas repercusiones en el sistema financiero internacional y nacional.

25 Foro de Laboristas por una Nueva Constitución, Manifiesto "Por una Nueva Constitución que ponga al Centro el Valor del Trabajo", manifiesto interno, abril 2020.

26 Alicia Bárcena, "Desafíos de América Latina y el Caribe en la post-pandemia", exposición en la Conferencia del Foro Permanente de Política Exterior de Chile, 5 de agosto, 2020. <https://foropoliticaexterior.cl>

Frente a la actual crisis sanitaria, los planes del gobierno y la mencionada Red de Protección Social han sido insuficientes. En la mayoría de los casos, las medidas propuestas han llegado tarde y con un sinnúmero de condicionantes burocráticas. Las ayudas han sido focalizadas especialmente en los sectores vulnerables, y no universalizadas a la gran mayoría de la población que padece bajo esta pandemia. En este contexto, las autoridades no han estado al nivel de un gobierno y un Estado que debería cuidar principalmente la salud de sus ciudadanos por sobre la marcha de la economía. Esto no significa dejar de lado el crecimiento económico, pero hay momentos en que la salud prevalece sobre el otro. Parte importante de los costos de esta crisis lo han debido asumir los propios trabajadores y trabajadoras —véase tan solo la Ley de Protección del Empleo—, cuyos ingresos salen de los fondos del seguro de cesantía.

El Chile pospandemia será un país más pobre, más desigual, con altas tasas de desempleo, con mayor pobreza, y extrema pobreza; con hambre, herido en su dignidad y con una sociedad desencantada con sus autoridades. Las demandas que se originaron con el estallido social del 18-O no fueron de ninguna manera solucionadas por la mezquina Agenda Social del gobierno. Los sindicatos nacionales, las asociaciones gremiales del Estado, la CUT, levantaron estas demandas sociales y laborales en el período prepandemia y posteriormente en plena crisis sanitaria, y el gobierno hizo caso omiso de ellas.

En este sentido, no sería sorpresivo que, una vez levantadas las cuarentenas en las ciudades más importantes del país, tengamos rebrotes del estallido social —y no solo de la epidemia— en un 2.0. Precisamente la Encuesta de Criterios, entre el 27 y el 31 de julio, señala que frente a la posibilidad de un nuevo estallido, un 64% de los encuestados cree que las protestas volverán con más fuerza y serán más fuertes que las posteriores al 18-O.<sup>27</sup>

La revaloración de lo público y del rol de un Estado más protector y eficiente estará, se quiera o no, más presente que en cualquier otro momento. El debate respecto del Estado que queremos y necesitamos para enfrentar los retos futuros será ineludible. La pandemia nos enseñó que el Estado subsidiario y el mercado no son capaces de dar respuesta a la envergadura de los desafíos presentes y futuros, y que han fracasado. El país clama por mayor cohesión social, más equidad, más igualdad, y más y mejor democracia, todo lo cual pone seriamente en cuestión el modelo económico neoliberal.

La pandemia ha puesto de relieve el valor del trabajo, se ha recuperado y revalorado lo público, y —con todas sus insuficiencias— el rol del Estado. Se

---

27 Carlos Said, “¿Un nuevo estallido? 64% cree que las protestas volverán con más fuerza que antes”, *La Tercera*, 7 de agosto, 2020, p. 30. <https://bit.ly/33PE5Eo>

hace imprescindible un nuevo pacto social. Para el mundo social, laboral y político, el itinerario para una nueva Constitución, el plebiscito del 25 de octubre y luego la elección de las personas para el cargo de constituyentes el 11 de abril del próximo año, dibuja el camino más apropiado para ir acercándose a un Nuevo Pacto Social.

Chile, un país tan inserto en la economía mundial, tendrá que tomar nota de los cambios a nivel tanto internacional como nacional que se están presentando y debe intentar adaptarse a los nuevos escenarios, si no quiere quedar al margen de estas tendencias globales y, lo más crítico, padecer de una permanente incertidumbre política, social y económica.